

## **A C U E R D O**

En la ciudad de La Plata, a 22 de mayo de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores **Kogan, Genoud, Negri, Soria**, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 106.807, "G. , R.R. . Recurso de Casación" y su acumulada P. 108.817, "F. J.R. . Recurso de casación".

## **A N T E C E D E N T E S**

La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de diciembre de 2008, rechazó -en lo que aquí interesa- los recursos homónimos interpuestos por las defensas de R. R. G. y H. R.N. , incoados, en lo que respecta a G. , contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales e inhabilitación absoluta perpetua -con costas- por encontrarlo coautor del delito de tormento infligido por funcionarios públicos a una persona privada de su libertad, agravado por su muerte -arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45 y 144 ter inc. 2 del Código Penal- (fs. 134/148 del legajo casatorio 20.540), y con relación a N. , contra el pronunciamiento de la Sala Tercera de la

referida Cámara, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de tormentos inflingidos por funcionarios públicos a una persona privada de su libertad, agravado por su muerte, aplicados para obligarlo a confesar su participación en el delito del que se lo sospechaba autor y/o para castigarlo por las ofensas previas que profiriera hacia el personal policial de la dependencia donde aquéllos prestaban servicio -arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 144 ter inc. 2° del Código Penal y 1° de la Convención contra la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes- (fs. 69/72 del legajo casatorio 15.631; fs. 194/214).

Los defensores particulares de R. R. G. interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad (fs. 323/363 vta.; legajo P. 106.807) y la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, en beneficio de H. R.N. , articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (fs. 377/404; legajo P. 108.817), de los cuales fueron concedidos por esta Corte los de inaplicabilidad de ley (fs. 407/410).

Oído el señor Subprocurador General (fs. 415/427 vta.), dictada la providencia de autos (fs. 434) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la

Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

### **C U E S T I O N E S**

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por los defensores particulares de R. R.G. ?

2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de H. R.N. ?

### **V O T A C I Ó N**

**A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:**

1. Los defensores de G. fundamentaron el recurso en la arbitrariedad de la decisión en crisis, por el tratamiento brindado en orden a tres cuestiones: a) en cuanto le atribuyó infundadamente a su asistido intervención en los hechos que dieron origen al proceso, apartándose del principio de debido proceso y de la garantía de defensa en juicio; b) en razón del tipo penal aplicado "... ya que atento a la entidad y conclusiones de las pruebas invocadas, y no habiéndose acreditado siquiera el componente subjetivo del tipo penal achacado, result[a] ser un hecho atípico ya que jamás pudo probarse que D. hubiese sido torturado" y c) por no haberse demostrado que los hechos presuntamente acaecidos hayan sido determinantes

para provocar la muerte de la víctima (fs. 332 vta.).

En primer lugar, puntualizaron que no se encuentra acreditada la participación atribuida a G. , y que el nombrado "... hacía tan solo cinco días que había sido destinado a [la] dependencia policial, situación que demuestra a las claras que no resultaba ser persona de confianza de ninguno de sus superiores, como para que alguien se pudiera animar a hacerlo intervenir en un hecho criminoso de tanta gravedad como lo es [...] apremiar ilegalmente o imponerle tormentos a un detenido..." (fs. 333 vta.). Denunciaron vulneradas las garantías de debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley "... al pretenderse incluir por mero prejuicio y capricho a [su] defendido dentro de un grupo de policías, el que habría tenido a su vez hipotética participación e imaginarios roles en el desarrollo de ciertos hechos...", los que -a su entender- se desconocen (fs. 335).

En cuanto al segundo extremo, precisaron que "... no se realiza ningún análisis de subsunción: haciéndose meramente hincapié en la supuesta configuración del elemento subjetivo especial que requiere el tipo [...], pero habiéndose omitido señalar a través de qué medios y con qu[é] objetivo se pudieron haber aplicado y/o se produjeron esos supuestos 'tormentos', así como se omite referir qu[é] medios se emplearon para tener por

configurado el elemento objetivo del mismo..." (fs. 337). Refirieron, también, que el delito de imposición de tormentos requiere que se indique el motivo por el cual la persona pudo haber sido torturada, lo que no se probó en autos, y citaron -en abono de tal postura- los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Bueno Alves, Juan Francisco vs. Argentina" y "Bayarri, Juan Carlos vs. Argentina" (fs. 338).

Por último, con relación al punto reseñado como c), observaron que no fue acreditado el modo en que se provocaron los sufrimientos inflingidos a la víctima, y tampoco que los supuestos tormentos hayan podido desencadenar la muerte de S. G. D. (fs. 341). Luego de criticar la valoración probatoria efectuada por el **a quo**, alegaron que "... tan solo se hace referencia a que D. ingresó a dicha oficina, mientras estaban todos sus componentes y luego se lo sacó [...] en andas, y a partir de allí se concluye en que todos los que supuestamente estaban en el lugar actuaron en su perjuicio, con clara violación a lo normado por el art. 45 del Código Penal, y art. 18 de la Constitución nacional..." (fs. 349 vta.). Requirieron, en esa dirección, que se solicite a la Comisaría 1ª de Morón el libro de guardia correspondiente a los meses de junio y julio de 1992, a fin de establecer el momento de ingreso de G. a la dependencia policial, prueba

cuya producción fue denegada previamente (fs. 351).

Invocaron asimismo que los criterios sustentados en las instancias anteriores para agravar la situación procesal de su asistido, resultan absurdos y violatorios del art. 41 del Código Penal; ello por haberse ponderado como agravante de la pena la condición de prófugo de G. (fs. 354 vta.). Añadieron que el encausado se enfrenta a "... una errónea aplicación e interpretación de la ley de fondo, ya que es evidente que ha habido con dicha arbitrariedad y perjuicio, una clara violación a lo normado en el art. 45 del Código Penal, por inobservancia de [los] arts. 210, 371 y 373 del C.P.P., ya que no se ha podido acreditar [...] que G. , hubiese intervenido en el hecho..." (fs. 356). Solicitaron, finalmente, que se subsuma la conducta atribuida a su ahijado procesal en la figura contenida en el art. 81 inc. "b" del Código Penal, o se lo absuelva (fs. 356 vta.).

2. Coincido con lo dictaminado por el señor Subprocurador General en cuanto aconseja el rechazo del recurso (fs. 420 **in fine**/422).

3. Los planteos defensistas suponen una pura confrontación con la valoración probatoria, mas tales contenidos escapan al ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio.

Además, la parte reedita los mismos planteos

llevados a conocimiento del tribunal intermedio tanto en el recurso de casación como en la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal -v. fs. 153/161 vta. del legajo casatorio 20.540, y 160/188 vta. de las presentes actuaciones-, pero omite hacerse cargo de los fundamentos basilares brindados por la casación al sentenciar desentendiéndose de la línea argumental que sostiene el pronunciamiento, lo que evidencia sin más la deficiente técnica formal en la que incurre y sella la suerte adversa de la queja presentada (art. 495 del C.P.P. y su doct.).

En efecto, el Tribunal de Casación resolvió cada uno de los reclamos defensistas. Ante el planteo vinculado con la acreditación de la causal de deceso de la víctima afirmó que "la conclusión del tribunal ... es la única explicación racional de lo sucedido. Una persona es llevada ilesa pero en mal estado emocional a la oficina del servicio de calle. Allí permanece encerrada con cuatro funcionarios policiales durante dos horas y media. Tras ello es llevada inconsciente y golpeada a su celda. Poco después es hallada en grave estado y fallece cuando los policías intentaban llevarla al hospital. En este contexto, no es razonable suponer que la víctima haya fallecido por casualidad y no, como lo estimaron los peritos, debido a un reflejo nervioso derivado del sufrimiento intenso al que fue sometida. Los parientes de la víctima, además,

declararon que Sergio no poseía ninguna enfermedad cardíaca ni respiratoria, información que coincide, a su vez, con los resultados de las dos autopsias, en las que no se halló ningún proceso orgánico que pudiera justificar la muerte ocurrida".

Agregó -con relación a la denunciada falta de análisis acerca del mecanismo empleado para la producción de las lesiones- que "lo relevante en el caso es el hecho de que tales lesiones fueron producidas al detenido en el interior de la oficina del servicio de calle y que todas ellas, principalmente las de los testículos, en conjunción y sumadas a la prolongación del sufrimiento y al mal estado emocional de la víctima, adquirieron una dimensión singular, de suficiente entidad para considerarlas torturas".

Con respecto a la oportunidad en que fueron producidas las lesiones del rostro, la lengua y las muñecas, añadió el sentenciante que "el intento de la defensa de ubicarlas en los momentos anteriores al ingreso de la víctima a la oficina de servicio de calle contradice lo que surge de la declaración del testigo O. , quien en el debate dijo que en ningún momento notó que el detenido estuviera lesionado antes de ser encerrado con el personal policial. Inclusive, según el tribunal, el propio G. declaró en el juicio que la condición de D. al ingreso a la



oficina del servicio de calle era óptima, sin que interesen demasiado en este punto las supuestas contradicciones destacadas por la defensa con el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del mismo departamento judicial".

Adunó a ello que "las críticas dirigidas contra la descalificación de la declaración del imputado, el tribunal se ha ocupado de explicar que su versión resultaba contradictoria con la de los testigos O. , L. y L. , quienes aseguraron que G. en ningún momento había salido de la oficina del servicio externo mientras la víctima había permanecido encerrada en ella. Tampoco resulta relevante, en el caso, que el imputado haya sido nuevo en la comisaría, pues la atribución de su participación en el delito de torturas no se fundamenta en la existencia de una práctica reiterada en esa seccional, sino en su acreditada intervención en el interior de la oficina del servicio de calle, con lo cual deviene abstracto el ofrecimiento de prueba de la defensa, que además es improcedente por no encuadrar el supuesto en las previsiones del art. 457 del CPP".

Finalmente indicó que "en lo que respecta a la afirmación de que no se ha demostrado un accionar conjunto y homogéneo del personal del servicio externo, con la consecuente aplicación, en subsidio, de la figura del

homicidio preterintencional, valen enteramente las explicaciones brindadas anteriormente al analizar el cuestionamiento formulado por el defensor de H. N. " (fs. 212/213 vta.; del voto del Juez Celesia y adhesión simple del Juez Mahiques).

También el tribunal intermedio, al tratar los agravios que esgrimieron los letrados de los restantes coimputados, y que luego hizo extensivo a G. , señaló lo que sigue.

En cuanto al delito de tormentos indicó respecto de la acreditación de la causal del deceso del detenido que "... por más que no se haya podido acreditar con certeza en la sentencia la existencia de un proceso asfíctico ni el pasaje de corriente eléctrica, de todos modos no quedan dudas de que la víctima, con independencia del método empleado por los agresores, padeció un sufrimiento de similar entidad, puesto en evidencia por la persistencia, el carácter y la gravedad de las lesiones, principalmente aquellas constatadas en los testículos. La defensa ha intentado minimizar la relevancia de tales lesiones, considerándolas en forma aislada y argumentando que un apretón en los testículos, si bien puede ocasionar un desequilibrio vital, no alcanza para configurar un persistente castigo".

Adicionó a ello que "El principal rasgo

característico del delito de torturas está dado por la causación de dolores o padecimientos físicos o psíquicos de suma gravedad, sufrimiento que sólo puede medirse ponderando las agresiones en su totalidad. El conocido estado emocional de D. , sumado a la sujeción de su muñecas, los golpes en el rostro, los apretones y golpes en los testículos y la prolongación de ese sufrimiento durante dos horas y media, a los ojos de cualquiera poseen gravedad suficiente para considerarlos tormentos. Tampoco resulta viable el desplazamiento de la calificación legal de los hechos hacia la figura del artículo 81 inc. b del Código Penal, pues el homicidio cometido en tales condiciones, cuando las lesiones que derivan en la muerte de la víctima formaron parte de los tormentos, queda consumido por la figura del art. 144 tercero, inciso 2° que, con el lenguaje propio de las figuras preterintencionales, se refiere a la muerte que 'resultare' con motivo u ocasión de la tortura" (fs. 206/206 vta.; del voto el Juez Celesia y adhesión simple del Juez Mahiques).

También se expidió el órgano casatorio en lo que respecta a la autoría de los imputados, en particular, al tratar el recurso de N. , al que remitió al abordar esta parcela del de G. (v. fs. 213 vta.). Así señaló que "Está probado que R. , F. , N. y G. permanecieron encerrados con la víctima en la oficina del servicio de calle por un

espacio aproximado de dos horas y media. Hasta ese momento la víctima no poseía lesiones y había ingresado a la oficina de pie y sin esposas. No se ha podido determinar con exactitud cuál fue la actividad concretamente desempeñada por cada uno de los funcionarios en el interior de la oficina de servicio de calle, pero se sabe que todos actuaron movidos por un plan común de torturar a la víctima y que cada uno de ellos cumplió una función específica conforme con ese plan. Por lo tanto, con independencia de la tarea desarrollada por cada uno de los policías, al haber éstos tomado parte en un plan que ellos mismos desarrollaron y además ejecutaron, N. , quien se hallaba entre esos cuatro funcionarios y cumplió un rol específico dentro de ese reparto funcional de tareas, debe responder como coautor del delito por el que viene condenado, conforme con el artículo 45 del Código Penal" (fs. 208 vta./209; del voto del Juez Celesia y adhesión simple del Juez Mahiques).

Ahora bien, conforme lo transcripto en los párrafos precedentes, y si bien los recurrentes expresan su oposición a la actividad valorativa, sólo exponen una opinión personal -divergente a la del juzgador- que no plasma la concurrencia de la invocada arbitrariedad fáctica denunciada. Tampoco evidencian que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los

juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.

Cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (C.S.J.N., Fallos 310:234); siendo doctrina consolidada que no configura ese supuesto excepcional la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (Fallos 250:348). Además, el vicio debe tener tal entidad como para que, en el caso de ser conjurado, modifique la solución tomada por el **a quo**.

En definitiva, los impugnantes no han podido demostrar que la sentencia padezca de algún vicio que alcance alguno de los supuestos que abarca la arbitrariedad denunciada (doct. art. 495, cit.).

Finalmente, en lo que respecta a la expresión relativa a que "los criterios sustentados en las instancias anteriores para agravar la situación procesal de su asistido, resultan absurdos y violatorios del art.

41 del Código Penal", ello por haberse valorado como agravante de la pena la condición de prófugo del imputado -fs. 354 vta.-, más allá de haber sido formulada dogmáticamente, lo cierto es que tal cuestión no fue llevada a conocimiento del órgano casatorio en el recurso respectivo -v. fs. 153/161 vta. del legajo 20.540-, siendo invocada -recién- en la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal -v. fs. 160/188 vta.- y rechazada por extemporánea por el Tribunal de Casación -v. fs. 213 vta., párrafos 3° y 4°-, decisión que llega incontrovertida a esta instancia.

Voto por la **negativa**.

Los señores jueces doctores **Genoud, Negri y Soria**, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la **negativa**.

**A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:**

La señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal invocó dos agravios.

1. En el primero de ellos, denunció la "[v]iolación del plazo razonable en el ámbito de tramitación de todo el proceso, exigido por el art. 8, apartado 1. de la C.A.D.H., ello con arreglo al entendimiento jurisprudencial de dicho instituto que

efectuase la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (fs. 381 vta.).

Explicó que "desde la fecha de ocurrencia de los eventos imputados hasta el debate oral y público, transcurrieron once -11- años; y desde la interposición del recurso de casación hasta la actualidad, un lapso de tiempo cercano a los seis (6) años; período en el cual el imputado de autos se limitó a ejercer su defensa, a solicitar la revisión de la sentencia de condena que se le había impuesto, y a intentar recuperar su libertad ambulatoria" (fs. 382 vta.).

Afirmó que "corresponde entender -en principio- como plazo máximo para la consideración del plazo razonable del art. 8.1 de la Convención el fijado por la ley 24.390 (es decir, tres años y seis meses)" (fs. 385). Se refirió también a los criterios elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y receptados por la Corte Interamericana de Justicia para la determinación de la razonabilidad del plazo de extensión del proceso: complejidad del caso, conducta del procesado y diligencia de las autoridades competentes en la conducción del trámite procesal, ocupándose de su relación con el presente caso (v. fs. 386 vta./387 vta.).

Concluyó el embate señalando que la extinción de la acción penal por prescripción es la herramienta adecuada

para salvaguardar los derechos conculcados, de acuerdo con la doctrina elaborada por la Corte federal en los precedentes "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband" y "Podestá" (en ese orden, Fallos 272:188, 300:1102, 322:360 y 329:445) -v. fs. 390 vta.-.

2. En el segundo, calificó a la sentencia de arbitraria "por violación al principio de necesaria correlación entre la imputación y el fallo, tal como lo establece al art. 18 de la C.N." (fs. 393 vta.).

Explicó que se ha producido una mutación esencial de la base fáctica atribuida a su asistido, en razón de que el juzgador sumó ultrafinalidades a las descripciones objetivas por las que fue sometido a proceso (fs. 393 vta./394), conculcándose -de tal modo- el art. 18 de la Constitución nacional. En abono de su postura, citó los precedentes de la Corte federal "Tarifeño", "García", "Ferreyra", "Cattonar", "Cáceres", "Fiscal c/Fernández", "Mostaccio", "Marcilese" y "Quiroga" (fs. 396/398 vta.).

Precisó, luego, los alcances de las garantías de debido proceso y defensa en juicio, a lo que agregó que "la diferencia existente entre la descripción fáctica de los hechos atribuidos en la acusación y los contenidos en la sentencia respecto de las acciones disvaliosas acontecidas, ha impedido a [su] asistido H. R. N. -y a sus distintos asesores letrados- ejercer fehacientemente su derecho de



defensa, por cuanto se quebrantó el contradictorio al sumar ultrafinalidades a aquellas, afectándose así la necesaria correlación entre la imputación y el fallo" (400 vta.). Requirió, en consecuencia, la declaración de nulidad parcial de la sentencia de condena (fs. 401).

3. Comparto lo aconsejado por el señor Subprocurador General a fs. 422/427 vta. El recurso no puede progresar.

4. En cuanto al primer planteo de la parte, y sin entrar a considerar las premisas en que se sustenta -con base en las previsiones de la ley 24.390-, lo cierto es que resulta extemporáneo desde que no ha sido introducido en tiempo oportuno, lo cual ha frustrado el tránsito adecuado de esa pretensión por ante el órgano prioritariamente habilitado a su tratamiento.

En efecto, desde el dictado de la sentencia de condena (29 de octubre de 2003), ni en el recurso de casación presentado el 19 de noviembre de 2003 -v. fs. 98/103 del legajo casatorio 15.631), ni en la presentación por parte de la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal del memorial que prevé el art. 458 del Código Procesal Penal -previo desistimiento de la audiencia de informes- el 29 de mayo de 2007 -v. fs. 160/167 vta. del legajo mencionado-, hubo alguna petición de la parte en el sentido indicado a fin de excitar la jurisdicción del

Tribunal sobre el punto y con el alcance extintivo pretendido. Ello teniendo en cuenta que el hecho data del 7 de agosto de 1992.

En rigor, las circunstancias apuntadas evidencian que había transcurrido el término invocado en el recurso aquí traído antes del dictado de la sentencia del tribunal intermedio, sin que la problemática del plazo razonable fuera siquiera mencionada, cuando esa era la ocasión propicia para su postulación.

Y ello no se ve desvirtuado por la referencia al precedente "*B. P., T. S. y S. R., A. s/contrabando*" que formula el recurrente en nota al pie a fs. 316 vta. (Fallos 328:121, cit.), pues lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló en el considerando 8° del mismo fue, justamente, que el planteo relativo al plazo razonable era extemporáneo pues las situaciones invocadas en la impugnación existían al momento de producirse el alegato, sin que fuera mencionado por la parte en esa oportunidad.

Así las cosas, el embate resulta fruto de una reflexión tardía que obsta a su admisibilidad bajo los parámetros de excepcionalidad propuestos por el recurrente -por la pretensa cuestión federal involucrada- en la medida en que no lo llevó a conocimiento y decisión del órgano casatorio (conf. P. 101.991, sent. del 26/VIII/2009; P. 100.728, sent. del 5/VIII/2009; P. 102.157, sent. del

15/VII/2009).

5. Tampoco puede ser atendido el planteo referido a la arbitrariedad del fallo por haberse conculcado el principio de congruencia.

Liminarmente hay que señalar que la alegada infracción a dicho principio remite en principio al examen de temas de índole procesal, ajenos por regla al conocimiento de esta Corte en vía extraordinaria (doct. art. 494, C.P.P.).

Ahora bien, la tacha de arbitrariedad no ha sido articulada con la suficiencia y la carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede.

Ante el mismo reclamo defensorista, esto es, que los jueces, al incluir en la materialidad ilícita las finalidades de las supuestas torturas, a saber, obligarlo a confesar su participación en un delito y/o castigarlo por las ofensas previas que profiriera hacia el personal de la dependencia, excedieron el objeto procesal fijado en la acusación, que no contenía ninguna mención de ello, el Tribunal de Casación sostuvo lo que sigue.

Que "el comprobado exceso del tribunal respecto de los hechos que fueron materia de acusación en nada perjudica lo decidido en la sentencia sobre la calificación jurídica. Las finalidades de castigar a la víctima u obligarla a confesar, mencionadas en la definición que

brinda el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no constituyen requisitos típicos del delito de torturas conforme con la ley penal Argentina".

Explicó que "La definición de tortura del artículo 1 de la Convención cumple la finalidad de fijar un estándar mínimo para la prevención de esa práctica en los países signatarios, al que se deben adecuar sus legislaciones internas, pero no puede ser empleada para recortar el alcance de un ordenamiento jurídico que proporcione contra ello una protección más amplia. El mismo artículo 1 de la Convención se ocupa de aclarar que su definición del término tortura 'se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance' (inciso 2°). Con anterioridad a que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la Convención contra la Tortura, el 10 de diciembre de 1984, nuestro legislador local, mediante la ley 23.097, había introducido la conocida reforma al artículo 144 tercero del Código Penal, por la que reemplazaba la noción de tormentos por la más específica de torturas, aclarando en su inciso 3° que por éstas debían entenderse no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando estos tuvieran gravedad suficiente. Si

bien históricamente la práctica de la tortura alcanzó su máxima expresión durante la vigencia de la ancien regime, que la empleada sistemáticamente como medio para obtener la confesión del imputado al aludir nuestra ley penal al acto de imponer 'cualquier clase de torturas' (art. 144 tercero, inciso 1°), definiéndolas como la causación de tormentos físicos o psíquicos de gravedad suficiente, admite claramente la comisión de ese delito con independencia de todo propósito probatorio o procesal (en igual sentido: Soler, Sebastián: Derecho Penal Argentino, Tomo IV, Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1988, p. 55; Ure, Ernesto J: 'Los delitos de los artículos 143 y 144 del Código Penal', en Revista de Derecho Penal y Criminología, n° 1, La Ley, Buenos Aires, 1970)".

Agregó que "... [e]ste amplio espectro de punición del delito de torturas, por otra parte, se compadece con las razones socio-políticas que impulsaron al legislador nacional a introducir la reforma de la ley 23.097, poco después de que se restaurara en nuestro país el régimen democrático, en inmediata respuesta a los horrores vividos durante la dictadura militar de 1976-1983, cuyos métodos, entre los que se destacaba la tortura, no se caracterizaban precisamente por su finalidad. El 31 de marzo de 1989, Argentina ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la

Tortura, cuyo artículo 2 incluye bajo ese rótulo 'todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal... o con cualquier otro fin...'. Esta Convención establece también que los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en dichos términos (art. 1) y a tomar medidas efectivas para prevenirla y sancionarla en el ámbito de su jurisdicción (art. 6). La referencia que hace la convención a 'cualquier otro fin' armoniza con las disposiciones del Código Penal argentino, que define expresamente a la tortura como inflicción de tormentos físicos o causación de sufrimientos psíquicos y la distingue de otras figuras penales en función de su gravedad y no de su finalidad (art. 144 tercero, inciso 3). Al haber contraído Argentina el compromiso internacional de tomar medidas necesarias para prevenir y sancionar la tortura, cualquiera sea su finalidad (art. 2), a los requerimientos típicos del artículo 144 tercer del Código Penal jamás podrían agregarse por vía interpretativa otros que impedirían reprimir ese delito en las condiciones exigidas por la convención regional menos aún cuando la Convención de Naciones Unidas establece en su artículo 1 inciso 2° que sus disposiciones no pueden ser empleadas para restringir el alcance de otros instrumentos internacionales o

legislaciones locales".

Así concluyó que "sentado que las finalidades que el tribunal de grado ha tenido por acreditadas en la sentencia no constituyen aspectos relevantes para la subsunción de la conducta de H. N. bajo la figura de torturas seguidas de muerte (art. 144 tercero, inciso 2º, CP), el exceso respecto de los hechos de la acusación no ha determinado en el caso ninguna violación al principio de congruencia" (fs. 203/205; del voto del Juez Celesia y adhesión simple del Juez Mahiques).

En oposición a ello, las críticas defensoras sustentadas en la diferencia existente entre la imputación y el fallo -en razón de que el juzgador sumó ultrafinalidades a las descripciones objetivas por las que fue sometido a proceso-, y desentendidas absolutamente de lo resuelto -esto es, que dichas finalidades no constituyen requisitos típicos del delito de torturas conforme con la ley penal Argentina ni perjudicaron la calificación jurídica-, y reeditando el mismo embate llevado a conocimiento del tribunal intermedio, se develan ineficaces para conmover lo decidido y demostrar arbitrariedad en lo resuelto (art. 495 del C.P.P. y su doct.).

Esos déficits permiten, más allá de cualquier otra consideración, descartar la arbitrariedad invocada (Fallos: 310:2376; 312:1859; 313:473, 325:1145 y 326:742,

entre otros; art. 495, cit.).

Por lo demás, el impugnante tampoco demuestra por qué sería aplicable al caso en la especie la doctrina emergente de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados en el recurso extraordinario traído a fs. 396/398 vta., frente a las notorias diferencias que exhibe este caso en relación con aquéllos, y de cuyas particularidades la parte se desentiende.

Voto por la **negativa**.

Los señores jueces doctores **Genoud, Negri** y **Soria**, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la **negativa**.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

#### **S E N T E N C I A**

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado con el señor Subprocurador General, se resuelve:

1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de R. R.G. , con costas (art. 496 del C.P.P.).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de H. R.N. , con costas (art. 496 del C.P.P.).



3. Difiérase para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por la defensa del coprocesador R. R. G. (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA      LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO

Secretario